EXPEDIENTE No: CEDH/V/VZN/AHO/****/****
QUEJOSO/VÍCTIMA: QV1
RESOLUCIÓN: RECOMENDACIÓN
8/2014
AUTORIDAD
DESTINATARIA: H. AYUNTAMIENTO DE AHOME,
SINALOA

Culiacán Rosales, Sin., a 24 de febrero de 2014

LIC. ARTURO DUARTE GARCÍA,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME, SINALOA.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 2º; 3º; 4º Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1º; 7º, fracción III; 16, fracción IX; 57 y 59 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, así como 1º; 4º; 77; 94; 95 y 96 de su Reglamento Interno, ha examinado los elementos contenidos en el expediente número CEDH/V/VZN/AHO/****/****, relacionados con el caso del señor QV1, y vistos los siguientes:

I. HECHOS

A. El 7 de diciembre de 2012, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió escrito de queja del señor QV1, por medio del cual hizo valer presuntas violaciones a sus derechos humanos, mismas que atribuyó a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa.

En dicho escrito, el quejoso señaló que el día 23 de noviembre de 2012 fue detenido por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome al ir circulando por la calle ****, en la colonia ****, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Después de esto, el señor QV1 refirió que fue trasladado a las instalaciones de dicha corporación policiaca, lugar donde señaló que tales agentes le perpetraron diversos golpes en su integridad corporal incluida su cabeza.

Por dichos hechos, el reclamante solicitó la intervención de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos a fin de que investigara las agresiones de las que fue objeto durante su detención por parte de sus agentes aprehensores.

B. Con motivo de la queja, este Organismo Estatal inició el procedimiento de investigación registrándose bajo el número de expediente CEDH/V/VZN/AHO/***/****, solicitando el informe respectivo a los CC. Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, ambos del municipio de Ahome, Sinaloa, esto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 45 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

II. EVIDENCIAS

En el presente caso las constituyen:

1. Escrito de queja presentado ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos por el señor QV1, por medio del cual hizo valer presuntas violaciones a sus derechos humanos, mismas que atribuyó a elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa.

2. Acta circunstanciada de fecha 19 de diciembre de 2012, elaborada por personal de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con motivo de la entrevista realizada al señor QV1 al interior del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

3. Solicitud de informe mediante oficio número CEDH/VZN/AHO/***/**** de fecha 20 de diciembre de 2012, dirigido al Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, a través del cual se solicitó remitiera el informe de ley correspondiente respecto a los hechos que el señor QV1 denunció ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

4. Solicitud de informe mediante oficio número CEDH/VZN/AHO/***/**** de fecha 20 de diciembre de 2012, dirigido al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, a través del cual se solicitó remitiera un informe relacionado a los hechos que el señor QV1 denunció ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa.

5. Informe recibido en este Organismo Estatal mediante oficio número ***/2013 de fecha 9 de diciembre (sic) de 2013, signado por el Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, mediante el cual dio respuesta a lo solicitado.

A dicho informe adjuntó copia certificada de la siguiente documentación:

a) Certificado médico de fecha 24 de noviembre de 2012, practicado al señor QV1, por parte del personal médico del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

b) Dictamen de integridad física y toxicomanía con número de folio **** de fecha 23 de noviembre de 2012, practicado al señor QV1, por parte de perito médico adscrito a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República.

6. Informe recibido en este Organismo Estatal mediante oficio número ***/2012 de fecha 27 de diciembre de 2012, signado por el Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, mediante el cual dio respuesta a lo solicitado.

A dicho informe adjuntó copia certificada de la siguiente documentación:

a) Oficio número ***/2012-E de fecha 23 de noviembre de 2012, suscrito por el Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla de Ahome, Sinaloa, por medio del cual el señor QV1 fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la federación.

b) Parte informativo número ****-2012 de fecha 23 de noviembre de 2012, suscrito por los CC. AR1 y AR2, agentes adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, elaborado con motivo de la detención del señor QV1.

c) Certificado médico número **** de fecha 23 de noviembre de 2012, practicado al señor QV1, por parte de personal médico adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

El día 23 de noviembre de 2012, el señor QV1 fue detenido en flagrancia delictiva por su probable responsabilidad en la comisión del delito contra la salud por parte de los CC. AR1 y AR2, agentes adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, la cual fue llevada a cabo en la colonia ****, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Después de esto, el señor QV1 fue trasladado a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, donde personal médico le practicó el certificado médico número **** de fecha 23 de noviembre de 2012, haciendo constar en el mismo que a la revisión presentaba dermoabrasiones en torso interior y abdomen, una equimosis en muslos y piernas cara posterior.

Acto seguido, el quejoso fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la federación, lugar donde perito médico adscrita a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República le practicó el dictamen de integridad física y toxicomanía con número de folio

**** de fecha 23 de noviembre de 2012, haciendo constar en el mismo que a la revisión presentaba una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 14 por 6 centímetros localizada en cara posterior que involucra tercio medio y proximal de muslo izquierdo, una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 8 por 4 centímetros localizada en región glútea izquierda, una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 4 por 2 centímetros localizada en cara posterior tercio medio de muslo derecho, una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 9 por 2 centímetros localizada en cara posterior tercio distal de muslo izquierdo, una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 6 por 2 centímetros localizada en cara posterior tercio distal de muslo derecho, una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 16 por 2 centímetros localizada en borde interno que involucra tercio proximal y medio de pierna izquierda, una **costra** seca en fase descamativa de forma irregular que mide 3 centímetros localizada en cara anterior tercio medio de pierna derecha, una **escoriación** de forma irregular que mide uno por un centímetro localizada en cara posterior del segundo dedo de mano izquierda y una escoriación de forma irregular que mide 0.5 centímetros localizada en región malar derecha.

En fecha 24 de noviembre de 2012, el señor QV1 ingresó al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, lugar donde personal médico le practicó certificado médico haciendo constar en el mismo que a la revisión presentaba equimosis en ambos muslos cara posterior de 5 por 5 centímetros de diámetro, equimosis en ambos glúteos de 2 por 2 centímetros de diámetro.

IV. OBSERVACIONES

Del análisis lógico-jurídico llevado a cabo sobre las constancias que integran el expediente que ahora se resuelve, se desprende que los CC. AR1 y AR2, agentes adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, transgredieron el derecho humano a la integridad física y de seguridad personal en perjuicio del señor QV1, esto con motivo de los malos tratos de los que fue objeto durante su detención por parte de sus agentes aprehensores.

DERECHO HUMANO VIOLENTADO: Derecho a la integridad física y a la seguridad personal

HECHO VIOLATORIO ACREDITADO: Malos tratos

Todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de nuestra entidad federativa y de sus municipios tienen la obligación inexcusable de respetar, proteger y garantizar en todo momento, durante la detención de una persona a

quien se le atribuye una conducta delictiva, su derecho humano a la integridad física y de seguridad personal.

Esto obedece primeramente a que al ser las corporaciones policíacas, tanto del ámbito estatal como municipal, partes integrantes del Estado de Sinaloa, tienen implícita su propia naturaleza jurídica, la cual se encuentra estipulada en el artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

En relación a esta naturaleza jurídica dicho precepto constitucional establece que “El Estado de Sinaloa, como parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, se constituye en un Estado democrático de derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales que le son inherentes”.

Por su parte, el artículo 3 de nuestra Constitución local señala expresamente que las tareas fundamentales del Estado de Sinaloa son “promover el bienestar individual y colectivo de los sinaloenses,... la seguridad individual y la paz social”.

Es decir, dichos preceptos constitucionales exigen implícitamente a cualquier autoridad de nuestra entidad federativa y de sus municipios, incluidos sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, proteger, garantizar y respetar los derechos humanos, lo que redundará en una vida más digna, un mayor bienestar individual y colectividad, así como una mayor seguridad individual y paz social.

Por si fuera poco, el artículo 4 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, señala que “en el Estado de Sinaloa toda persona es titular de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Constitución, así como de los previstos en los instrumentos internacionales incorporados al orden jurídico mexicano”.

Al respecto cabe señalar que el derecho humano a la integridad física y de seguridad personal es un derecho ampliamente reconocido y protegido por los artículos 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por diversos instrumentos internacionales que el Estado Mexicano ha suscrito y ratificado de conformidad con el artículo 133 de nuestra Carta Magna, dentro de ellos, por el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los cuales se asienta el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

Dicho derecho implica que todo ser humano por el simple hecho de serlo tiene la prerrogativa de mantener y conservar su integridad física, psíquica y moral, es decir, que se preserven todas las partes y tejidos de su cuerpo en estado de salud, que se conserven sus habilidades motrices, emocionales e intelectuales intactas y que ésta desarrolle su vida de acuerdo a sus convicciones, todo esto con la finalidad de que la persona acceda a una vida digna.

Además de esto es necesario puntualizar que nuestra Constitución local en su artículo 4 Bis A estipula el derecho de toda persona a que se respete su vida, lo cual implica no sólo la prerrogativa a no ser privado de la vida de forma arbitrariamente, sino también todas aquellas condiciones que inciden de forma directa en la dignidad de la propia vida, siendo una de ellas el respeto, protección y garantía de la integridad física y de seguridad personal del individuo.

Aunado a esto, el artículo 4° Bis B, fracción IV, de la multicitada Constitución local, establece el derecho de toda persona habitante en el Estado de Sinaloa a disfrutar una vida libre de violencia, lo cual exige implícitamente a todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley a no hacer uso de la violencia durante la detención de una persona.

Es por todos estos motivos que este derecho humano tiene eficacia directa y vincula a todos los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley de nuestra entidad y de sus municipios, además, su protección, garantía y respeto es una obligación constitucional que de forma expresa lo exige el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así las cosas y en atención al caso que nos ocupa, en fecha 7 de diciembre de 2012, el señor QV1 presentó escrito de queja ante esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos por presuntas violaciones a sus derechos humanos, particularmente al de integridad física y de seguridad personal, mismas que atribuyó a sus agentes aprehensores de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa.

En relación a esta denuncia es importante señalar que esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos ha acreditado en la presente investigación que el señor QV1 sí sufrió de malos tratos por parte de sus agentes aprehensores, los CC. AR1 y AR2, agentes adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, al llevar a cabo su detención en fecha 23 de noviembre de 2012, en la colonia ****, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

Dicha afirmación obedece a que después de su aprehensión, el señor QV1 fue trasladado a las instalaciones de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, lugar donde personal médico le practicó el certificado médico número **** de fecha 23 de noviembre de 2012, haciendo constar en el mismo que a la revisión presentaba dermoabrasiones en torso interior y abdomen, una equimosis en muslos y piernas cara posterior.

Aunado a esto, perito médico adscrito a la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, le practicó al señor QV1 el dictamen de integridad física y toxicomanía con número de folio **** de fecha 23 de noviembre de 2012, haciendo constar en el mismo que a la revisión

presentaba una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 14 por 6 centímetros localizada en cara posterior que involucra tercio medio y proximal de muslo izquierdo, una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 8 por 4 centímetros localizada en región glútea izquierda, una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 4 por 2 centímetros localizada en cara posterior tercio medio de muslo derecho, una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 9 por 2 centímetros localizada en cara posterior tercio distal de muslo izquierdo, una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 6 por 2 centímetros localizada en cara posterior tercio distal de muslo derecho, una **equimosis** de coloración violácea de forma irregular que mide 16 por 2 centímetros localizada en borde interno que involucra tercio proximal y medio de pierna izquierda, una **costra** seca en fase descamativa de forma irregular que mide 3 centímetros localizada en cara anterior tercio medio de pierna derecha, una **escoriación** de forma irregular que mide uno por un centímetro localizada en cara posterior del segundo dedo de mano izquierda y una escoriación de forma irregular que mide 0.5 centímetros localizada en región malar derecha.

Además, con fecha 24 de noviembre de 2012, el hoy agraviado ingresó al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, lugar donde personal médico le practicó certificado médico haciendo constar en el mismo que a la revisión presentaba equimosis en ambos muslos cara posterior de 5 por 5 centímetros de diámetro, equimosis en ambos glúteos de 2 por 2 centímetros de diámetro.

Es importante señalar que del parte informativo número ****-2012 de fecha 23 de noviembre de 2012, suscrito por los CC. AR1 y AR2, agentes adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, con motivo de la detención del señor QV1, no se desprende que el hoy agraviado haya opuesto resistencia a la aprehensión que diera lugar a algún tipo de lesión como consecuencia del empleo y uso de la fuerza por parte de sus captores.

Es por todos estos motivos que este organismo de control constitucional no jurisdiccional considera existen elementos de prueba suficientes para señalar que el señor QV1 sí sufrió de malos tratos y lesiones durante su detención.

Por ello esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos puede señalar a los CC. AR1 y AR2, agentes adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, responsables de transgredir el derecho humano a la integridad física y de seguridad personal en perjuicio del señor QV1.

Con base en todo lo anterior, dichos funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley transgredieron el párrafo tercero del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual les impone en el ámbito de su competencia la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de toda persona.

De igual manera, dichos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han transgredido diversas disposiciones constitucionales en las que se reconoce y protege el derecho humano a la integridad física y de seguridad personal, siendo lo dispuesto en los artículos 16, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, dichos funcionarios públicos han transgredido diversas disposiciones de carácter internacional en las cuales se reconoce y protege dicho derecho tal como lo dispuesto en los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 7, 9.1 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1 y 6 de los Conjuntos de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión y 2 y 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

En este sentido, es necesario puntualizar que la responsabilidad administrativa de los servidores públicos se deriva de los actos u omisiones en que incurren en el desempeño de sus atribuciones que contempla la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, pues el consentir tales omisiones es como dejar impunes prácticas contrarias a la legalidad, honradez e imparcialidad que garantizan el éxito del buen servicio público.

Los artículos 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, señalan:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

...

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.”

Constitución Política del Estado de Sinaloa:

“Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades contenidas en este Título, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los Ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

Todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de la jerarquía, denominación y origen del cargo. Se concede acción popular para denunciar los delitos y faltas a que se refiere este Título, bajo la más estricta responsabilidad del denunciante y mediante la presentación de elementos de prueba.”

Preceptos de los que claramente se advierte que servidor público es toda persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en alguno de los tres poderes del Gobierno del Estado, en los Ayuntamientos, así como en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas

y fideicomisos del Estado y Municipios en los Ayuntamientos y organismos e instituciones municipales.

En similares términos se pronuncia la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en sus artículos 2º; 3º; 14 y 15, que establecen:

“Artículo 2.- Es sujeto de esta Ley, toda persona física que desempeñe o haya desempeñado un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o paraestatal, municipal o paramunicipal, así como en las sociedades y asociaciones similares a estas, en Organismos que la Constitución Política del Estado de Sinaloa y Leyes otorguen autonomía y, en los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, con independencia de la jerarquía, denominación y origen del empleo, cargo o comisión, así como del acto jurídico que les dio origen.

Artículo 3.- Los servidores públicos en ejercicio de su función serán sujetos de responsabilidad administrativa cuando incumplan con sus deberes o incurran en las conductas prohibidas señaladas en esta Ley, así como en aquéllas que deriven de otras leyes y reglamentos.

Artículo 14.- Es responsabilidad de los sujetos de esta ley, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en la misma, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones.

Artículo 15.- Todo servidor público, tendrá los siguientes deberes:

I. Cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público;

...”

Ordenamientos que de igual manera señalan quién tiene la calidad de servidor público y que lo es cualquier persona física que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los tres poderes de Gobierno del Estado incluyendo los que prestan su servicio en el H. Ayuntamiento de Ahome.

De ahí que la autoridad responsable en la presente resolución tiene la obligación de conducirse en el desempeño de sus funciones con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, y

en contrapartida, el actuar fuera de estos supuestos necesariamente implica un exceso o deficiencia del empleo, cargo o comisión encomendado, el cual deberá ser sujeto del inicio de una investigación administrativa de parte del órgano de control interno del propio H. Ayuntamiento de Ahome.

Es así y toda vez que los CC. AR1 y AR2, agentes adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, han contravenido los artículos 14 y 15 fracción I de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa e incumplido a su obligación en observar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como de cumplir con eficiencia el servicio que se les ha encomendado, por ello, es pertinente se inicie el procedimiento administrativo disciplinario y de investigación por parte del Órgano de Control Interno del H. Ayuntamiento de Ahome, conforme a lo dispuesto por dicha ley de responsabilidades, a efecto de que se dé seguimiento al presente caso, se aporten los elementos que den lugar al esclarecimiento de los hechos y en su oportunidad se impongan las sanciones que contemplan dichos ordenamientos jurídicos y corresponden conforme a derecho.

Por todo lo antes analizado, esta Comisión Estatal considera que la conducta desplegada por los multicitados funcionarios públicos transgredió diversas disposiciones del orden jurídico nacional con lo cual violentaron los derechos humanos del señor QV1.

Por estas razones y al tener como marco el artículo 1° de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como el artículo 4° Bis segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular a usted, señor Presidente Municipal de Ahome, como autoridad superior jerárquica, las siguientes:

V. RECOMENDACIONES

PRIMERA. Instruya a quien corresponda para que al considerar los actos que motivaron la presente investigación así como los razonamientos expuestos por esta Comisión Estatal, se inicie procedimiento administrativo y/o penal en contra de los CC. AR1 y AR2, agentes adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, Sinaloa, para que de resultar procedente y acreditada su responsabilidad se impongan las sanciones correspondientes, informándose a esta CEDH del inicio, desarrollo y resolución recaída a tal procedimiento.

SEGUNDA. Se giren instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome, sean instruidos y capacitados respecto de la conducta que deben observar en el desempeño de sus funciones a fin de respetar los derechos fundamentales de todo ser humano, evitando caer en la repetición de actos violatorios como los acreditados en la presente resolución.

VI. NOTIFICACIÓN Y APERCIBIMIENTO

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental, tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese al licenciado Arturo Duarte García, Presidente Municipal de Ahome, Sinaloa, de la presente Recomendación misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número 8/2014, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día hábil siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso negativo, motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución lo mismo la General de la República que la del Estado, así como las leyes emanadas de una y de otra.

También se le hace saber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuvo una importante reforma en materia de derechos humanos la cual fue publicada en el *Diario Oficial* de la Federación el pasado 10 de junio de 2011.

El segundo párrafo del apartado B del artículo 102 de la misma, expresamente señala hoy día:

“Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.”

Asimismo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su reforma de fecha 10 de junio de 2011, que menciona en su artículo 1° que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consecuencia, aquellas autoridades a quienes se les dirija una Recomendación de parte de esta autoridad constitucional en derechos humanos, deben constreñirse a señalar que tiene por aceptada o no dicha Recomendación, más no señalar que la aceptan parcialmente.

En ese sentido, tanto la no aceptación como la aceptación parcial, se considera como una negación al sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos previsto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° Bis y 77 Bis de la Constitución Política del

Estado, ya que se traduce en la no aceptación del mencionado pronunciamiento.

Esta posible actitud de la autoridad destinataria evidenciaría una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como a una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y en consecuencia demuestra también el desprecio a la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional.

En este orden de ideas, las recomendaciones emitidas por los organismos públicos defensores de los derechos humanos del país, requieren, además de la buena voluntad, disposición política y mejores esfuerzos de las autoridades a quienes se dirigen, ser aceptadas y cumplidas conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, reconocidos en el párrafo tercero, del multicitado artículo 1º constitucional.

Es importante mencionar que de una interpretación armónica al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y 100, párrafo tercero del Reglamento Interno de la misma, cuando una autoridad o servidor público acepta una recomendación, asume el compromiso de dar a ella su total cumplimiento.

Ahora bien, en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes, las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia.

Notifíquese al señor QV1, en su calidad de quejoso, remitiéndole con el oficio respectivo, un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO